

boletín

Armas pequeñas y seguridad humana

Esta edición del Boletín está dedicada a Asia Central, una región de inseguridad y gran inestabilidad potencial. Los dos artículos de opinión de este número aportan ideas para la promoción del desarme en Afganistán y la mejora del mantenimiento del orden público en Kirguistán, respectivamente. Pueden enviarnos sus comentarios sobre estos artículos y cualquier información reciente relativa a los mismos y los publicaremos en el sitio web del CDH como apéndice a este número.

Asia Central: Armas, política y poder

"En Tayikistán, el poder está en las armas"

Abdulmolik Abdullojonov, candidato presidencial derrotado en las elecciones de 1994.

Varios factores endémicos de Asia Central contribuyen a la proliferación y la utilización indebida de las armas pequeñas en esta región.

Uno de estos factores son las fronteras artificiales de esta región. A excepción de Afganistán, los países de Asia Central eran repúblicas de la Unión Soviética que obtuvieron su independencia en 1991. Las fronteras fueron delimitadas en gran medida por las necesidades económicas del régimen de Stalin más que por fronteras étnicas o históricas. Desde la desaparición de la Unión Soviética, han surgido de forma violenta tensiones relacionadas con estas fronteras en cierto modo arbitrarias.

Otro factor es la poca cultura política que existe y la debilidad del estado de derecho. Los gobiernos de la región utilizan habitualmente a sus fuerzas de seguridad con fines políticos, y la protección de los derechos humanos nunca ha ocupado un lugar importante entre sus asuntos prioritarios. Sin embargo, cuando estos países se unieron a la "guerra internacional contra el terror", Kirguistán y Uzbekistán se convirtieron en importantes receptores de ayuda militar estadounidense, aunque al mismo tiempo el Departamento de Estado de EE.UU. los criticó por violaciones de los derechos humanos. En 2004, el Departamento de Estado de EE.UU. interrumpió la ayuda a Uzbekistán debido al deficiente historial de su gobierno en materia de derechos humanos.

Afganistán es un tercer factor. Las guerras prolongadas y la producción de heroína en este país se han sumado al tráfico de armas en toda la región. El tráfico de armas es muy frecuente en las permeables

En este número...

Asia Central: Armas, política y poder, por Alun Howard y Emil Juraev **páginas 1-4**

Reforma de la policía en Kirguistán, por la Foundation for Tolerance International **página 4**

Afganistán: Nuevos enfoques en la gestión de las armas, por Robin-Edward Poulton **página 6**

En sus propias palabras: ¿Cómo ha afectado la "guerra contra el terror" al tráfico de armas en Asia Central? **página 7**

Noticias breves **página 8**

Mención especial al proceso brasileño de desarme **página 9**

fronteras con Turkmenistán y Tayikistán. Además, casi todas las semanas se producen intercambios de disparos entre la guardia fronteriza y traficantes de drogas y armas a lo largo de la frontera tayiko-afgana. Sorprendentemente, con frecuencia se dice que el tráfico de armas hacia Afganistán es aún mayor a través de su permeable frontera con Pakistán.¹

La intolerancia religiosa y las políticas gubernamentales represivas constituyen otros factores. El Islam político es considerado por los gobiernos (todos excepto el de Tayikistán están en el poder desde antes de la independencia de 1991) como una amenaza. Las restricciones contra los "islamistas" fueron uno de los principales puntos de confrontación en la guerra civil de Tayikistán, entre 1992 y 1997. Las campañas del gobierno de Uzbekistán contra los "islamistas" han dado lugar al aumento de los grupos islámicos combativos en los últimos cinco años.

El Valle de Ferghana —que comparten Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán— generalmente se describe como un factor de inseguridad por sí mismo. Con unos controles fronterizos débiles e ineficaces, ha sido centro de tráfico de drogas, terrorismo, violencia étnica potencial y contrabando de armas. El crecimiento de la población, el desempleo y la competencia por los recursos —especialmente el agua— han contribuido a una tensión continua, alimentada por un fácil acceso a las armas que circulan por la región.

Perspectiva rápida de la zona

Durante la guerra civil de 1992-97 en **Tayikistán**, los insurgentes recibieron ayuda gracias a las armas procedentes de Afganistán.² Las fuerzas gubernamentales recibieron armas de Uzbekistán y de Rusia, que todavía tiene miles de soldados destacados allí, aunque están en proceso de retirada. Las armas que llegaban a ambos bandos eran principalmente fusiles de asalto Kalashnikov de fabricación rusa (tanto

AK-47 como AK-74), así como pistolas Makarov, ametralladoras y granadas propulsadas por cohetes.³ Al menos 60.000 personas murieron durante la guerra, que también produjo 500.000 desplazados internos, 20.000 refugiados que huyeron a Uzbekistán y Kirguistán y otros 75.000 a un Afganistán devastado por la guerra.⁴

En 1996, el gobierno tayiko aprobó una nueva ley sobre armas que entró en vigor a partir del año 2000. La inmensa mayoría de los permisos de armas se expiden para caza o para armas deportivas, y los programas de recogida de armas, tanto obligatorios como voluntarios, han reducido el número de armas de propiedad particular. La nueva legislación incorpora procedimientos de obtención de licencias, requisitos de almacenamiento seguro y restricciones a las importaciones y las exportaciones.⁵ Existen unas 10.000 armas registradas en el país, pero es prácticamente imposible calcular el número de armas de posesión ilegal (las estimaciones empiezan a partir de 20.000).⁶

Se sabe que los traficantes de drogas llevan armas, tanto para defenderse como para venderlas, y la droga aprehendida normalmente viene acompañada de armas.⁷ Además, con frecuencia las fuerzas armadas tayikas descubren alijos de armas abandonados por combatientes después de la guerra. Actualmente, el ejército ruso presta ayuda financiera y tecnológica a la guardia fronteriza de Tayikistán. Cuando estas tropas se retiren en septiembre de 2005, se teme que aumente el contrabando transfronterizo de drogas y armas.

Fuera de las principales ciudades (Dushanbé y Khujand), y especialmente en las regiones montañosas de Garm y Badakhshon, aún se considera poco seguro viajar sin escolta. No obstante, las estadísticas de violencia y delitos en los que intervienen armas son difíciles de conocer y generalmente son poco fiables.

En **Uzbekistán**, la intolerancia del gobierno hacia los "islamistas" ha conseguido crear un apoyo hacia el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), uno de los grupos armados más activos de la región. En 1999 y 2000, el IMU organizó dos grandes incursiones desde las montañas de Tayikistán hacia Batken, una región al sur de Kirguistán, en un intento por adentrarse en Uzbekistán. Esto supuso la toma de rehenes y fuertes enfrentamientos armados entre el ejército kirguiso y los combatientes, lo que provocó decenas de muertos en ambos bandos. En 1999, miembros del IMU organizaron una serie de atentados con bombas en importantes sedes gubernamentales de Tashkent, supuestamente dirigidos al presidente Karimov. Una serie de bombas de fabricación casera explotaron a principios del verano de 2004 en varios lugares, como un bazar, la Embajada de Estados Unidos y objetivos gubernamentales.

Debido a la falta de transparencia es difícil acceder a información sobre posesión de armas y delitos armados no políticos. En las regiones de Namangan,

Andijan y Ferghana, consideradas como "semilleros" de una fuerte identidad islámica, las poblaciones descontentas y oprimidas han sufrido numerosos arrestos secretos y arbitrarios, así como desapariciones.

Kazajstán es el único fabricante de armas de la región y aplica estándares anteriores a 1990 para el marcado de las armas, la supervisión de las ventas y el registro de los propietarios. El gobierno kazajo ha creado un Comité de la Industria de Defensa, dependiente del Ministerio de Industria, que supervisa la producción y exportación de armas. Se ha cuestionado su competencia en relación con la certificación de los usuarios finales y las normativas sobre intermediación en el tráfico de armas.⁸

La legislación general sobre armas en Kazajstán no es muy diferente a la de otros países de la región, ya que todos ellos basan su legislación sobre armas en las leyes de la época soviética. Tienen disposiciones sobre su posesión, clasificación, obtención de licencias y certificación para civiles y servicios especiales, sobre circulación de armas y sobre el almacenamiento de arsenales.

Según el periódico *Almaty Karavan*, uno de cada cinco hombres kazajos posee armas. Mientras tanto, se ha dado a conocer que en el 80% de los delitos de Kazajstán se utilizan armas.⁹ Este tipo de delitos es principalmente obra de mafias organizadas. La economía relativamente floreciente de Kazajstán ha dado lugar a la proliferación de grupos criminales totalmente armados que luchan entre sí por el territorio, al tiempo que atacan los negocios.

"Incluso un arma descargada se dispara una vez al año"
Proverbio kirguiso

En el vecino **Kirguistán**, a menudo considerado como el más liberal de los estados de Asia Central, existe una licencia de armas por cada setenta personas. En el año 2000 se registraron cincuenta y ocho muertes producidas por armas de fuego¹⁰, y se calcula que al año hay de 15 a 30 heridos sin desenlace mortal relacionados con armas de fuego.¹¹ Los delitos con armas están aumentando en el país. En los dos últimos años, ha habido al menos cinco asesinatos, la mayoría de ellos de empresarios, más un coronel que había tomado posesión del cargo de jefe del grupo anticorrupción dentro del Ministerio del Interior. Estos asesinatos, principalmente perpetrados a plena luz del día en la capital (Bishkek), han aumentado la sensación pública de inseguridad.

Se dice que las incursiones de combatientes islámicos en el país, en 1999 y 2000, han conseguido dejar alijos de armas en las montañas, lo que plantea la posibilidad de delitos ocasionales con armas y una insurgencia política armada.

En marzo de 2002, en la región de Aksy, la policía disparó indiscriminadamente contra un grupo que protestaba por el arresto de un líder de la oposición.¹²

Seis personas murieron y otras resultaron heridas. Estos asesinatos conmocionaron a todo el país, provocaron la dimisión del primer ministro y su gabinete y cuestionaron la competencia de la policía. Después de aquel incidente, se inició la reforma y el adiestramiento de la policía, patrocinado, entre otros organismos, por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

En una región en la que la cuestión de las armas y la seguridad sigue siendo un tabú para los organismos públicos, Kirguistán posee una participación de la sociedad civil relativamente más desarrollada. Se puede esperar que la sociedad civil de este país genere una presión creciente para que el gobierno se enfrente al delito, la incompetencia policial y la circulación de armas. Véase en este Boletín el artículo de opinión de la Foundation for Tolerance International.

Nakibullah Gul, de tres años de edad, fue secuestrado en las afueras de Kandahar (Afganistán), a principios de 2004. La terrible experiencia de su secuestro duró 32 días, hasta que su padre, un fabricante textil, consiguió el dinero para pagar un rescate de 4500 dólares. Para entonces, Nakibullah había perdido un dedo de la mano y otro del pie. En una carta de exigencia de rescate enviada con su dedo se decía: "Tenemos armas y nadie puede arrestarnos, debe pagar el dinero si quiere a su hijo".¹³

Resulta una ironía y algo que con frecuencia se pasa por alto el hecho de que en **Afganistán** las tropas de EE.UU. que llevan a cabo la "guerra contra el terror" se enfrentan a armas entregadas a los *muyahidines* "luchadores por la libertad" por anteriores gobiernos de EE.UU. Junto con las ingentes cantidades de armas abandonadas por los rusos cuando se retiraron, es casi imposible calcular cuántas armas hay en el país. El impacto de estas armas se está dejando sentir en toda la región y en el sur de Asia. Las abruptas y permeables fronteras de Afganistán siguen siendo un desafío crítico a la seguridad. Robin Poulton ofrece algunas ideas sobre la tarea de desarme, de enormes proporciones, en un artículo de opinión independiente en este mismo boletín.

Empezando a afrontar el problema

Tanto Kazajstán como Tayikistán han designado puntos de atención a escala nacional, tal y como requiere el Plan de Acción de las Naciones Unidas. Tayikistán fue la única nación que entregó un informe sobre la aplicación del Plan de las Naciones Unidas en 2003, pero ningún país ha hecho lo mismo hasta ahora durante este año.

El organismo regional que trabaja más activamente para restringir el tráfico de armas es la OSCE. Todos los países, a excepción de Afganistán, son miembros de la OSCE, y cada país ha firmado acuerdos no vinculantes con la OSCE en relación con las armas pequeñas.

La OTAN también ha demostrado un interés activo en la región. La OSCE y la OTAN están muy preocupadas por la seguridad de los arsenales y el tráfico de armas a través de la región. Sin embargo, apenas hay constancia de la destrucción de excedentes armamentísticos. Por ejemplo, mientras el gobierno de Tayikistán sigue recuperando armas de la guerra civil (casi 26.000 hasta junio de 2003), no existe una política de destrucción de estas armas. Las armas se conservan principalmente para su uso por parte de las fuerzas armadas, y las autoridades justifican esta política por la falta de producción de armas en el país, la incapacidad para comprar las armas nuevas necesarias y el agotamiento de las existencias actuales. Según algunos funcionarios, en el país sólo se destruyeron las armas inutilizables en pocas ocasiones.¹⁴

Ninguno de los estados regula la intermediación en el tráfico de armas, la "profesión" privada y a menudo ilegal de favorecer el comercio de armas. Viktor Bout, traficante ruso de origen tayiko y famoso infractor de las sanciones de las Naciones Unidas, ha actuado con total impunidad fuera de Tayikistán, entre muchos otros destinos de todo el mundo.

Es posible que los estados de Asia Central sigan generando una oposición armada y que sin darse cuenta apoyen el floreciente tráfico de heroína que se origina en Afganistán, sin estrategias interrelacionadas para crear unas fuerzas de seguridad eficaces, mejorar los derechos humanos y fomentar la tolerancia religiosa. Entre las cuestiones clave se incluyen la gestión de los arsenales, la destrucción de los excedentes de armas, el refuerzo de los controles fronterizos, estándares armonizados sobre la propiedad privada de armas y la reforma de una policía y unas fuerzas armadas corruptas, abusivas o ineficaces.

La pequeña pero creciente sociedad civil de la región desempeña un papel importante a la hora de documentar los problemas, así como para ofrecer opciones políticas para la acción nacional e internacional. No obstante, hay constancia de la supresión de las voces discrepantes, especialmente en Uzbekistán y Turkmenistán.

Posibilidades de actuación

Con unos pintorescos paisajes de montañas y lagos, habitados por diversas culturas, los estados de Asia Central poseen un considerable potencial turístico; un desarme demostrable contribuirá en gran medida a aprovechar ese potencial tranquilizando a los posibles turistas. Además, lo que es más importante: el uso compartido de los recursos naturales y la tolerancia étnica y religiosa reducirían el recurso a la oposición armada. Estos factores potencian la demanda de armas y requieren intervenciones comprometidas por parte de diversos sectores.

Los donantes y las organizaciones regionales pueden desempeñar funciones importantes a la hora

de fomentar una mayor transparencia, responsabilidad y tolerancia. El nexo creciente entre la reforma del sector de la seguridad y el control de las armas pequeñas es una cuestión en la que los donantes pueden tener un papel especialmente activo.

En el período anterior a la Conferencia de Revisión de 2006 sobre el Plan de Acción de las Naciones Unidas, los gobiernos de Asia Central tienen una oportunidad de demostrar su compromiso nacional y regional para controlar el tráfico ilícito de armas pequeñas *en todos sus aspectos*.

Alun Howard es asesor sobre cuestiones de armas pequeñas y colaborador del CDH. Emil Juraev es catedrático de la Universidad Americana de Asia Central en Bishkek.

Notas

1. Correspondencia personal con Sayed Fazlullah Wahidi, director de la Oficina Afgana de Coordinación de ONG, 3 de octubre de 2004.
2. En conversaciones con los periodistas en mayo de 2002, Jurabek Aminov (subdirector del KGB en Tayikistán) dijo que de un 10 a un 15 por ciento de las armas de los insurgentes procedían de Afganistán. Después del acuerdo de paz de 1997, unas 182 toneladas de armas introducidas en el país por combatientes repatriados desde Afganistán "desaparecieron" sin dejar huella.

Centro para el Diálogo Humanitario (2003), *The Central Asian Islamic opposition movements*, Humanitarian engagement with armed groups case study Vol 1 N.º 1, pág. 15.

3. International Alert (2004), *Small Arms Control in Central Asia*, Eurasia Series N.º 4, págs. 17-18, disponible en www.international-alert.org/pdf/pubsec/MISAC_eurasia_4.pdf

4. Bobi Pirsedi (2002), *The Small Arms Problem In Central Asia: Features and implications*, UNIDIR, pág. 41.

5. Gobierno de Tayikistán (2003), *Report on Implementation of the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons*, disponible en <http://disarmament2.un.org/cab/salw-nationalreports.html>

6. International Alert (2004), op cit, pág. 18.

7. *Ibidem*

8. International Alert (2004), op cit, pág. 29.

9. Almaty Karavan, *Weapons possession among citizens on the rise*, 25 de abril de 1997, como se cita en Pirsedi (2002), pág. 84.

10. S Neil MacFarlane y Stina Torjesen (2004), *Kyrgyzstan: A Small Arms Anomaly In Central Asia?*, Estudio sobre las armas pequeñas, pág. 20, disponible en

www.smallarmssurvey.org/OPs/OP12%20kyrgyzstan.pdf

11. *Ibidem*

12. Emil Juraev in the Central Asia – Revista online Caucasus Analyst, *Aksy: A Turning Point, or A Bump on a Downward Slope?* 24 de abril de 2002, disponible en

www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=28

13. Jenny Cuffe, BBC Radio 4, *Afghan children targeted by criminals*, 30 de junio de 2004, disponible en

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3851687.stm

14. International Alert (2004), op cit, pág. 20. Además, entrevistas de International Alert con representantes del Ministerio del Interior y el Comité para la Protección de las Fronteras Estatales en junio de 2003.

■ Opinión

Reforma de la policía en Kirguistán

"En muchos países, las personas se sienten seguras cuando ven a un hombre con uniforme de policía. Esos ciudadanos están convencidos de que nadie puede violar sus derechos o hacerles daño cuando un policía esté cerca. Aquí eso es justo al revés".

Un agente de policía kirguiso, hablando en una mesa redonda de la Foundation for Tolerance International (FTI) en mayo de 2004.

Los sistemas de aplicación de la ley tienen por objeto proporcionar una implementación clara y justa de las leyes nacionales para todos los ciudadanos. En la mayoría de los países, los policías se consideran a sí mismos como "servidores públicos".

Desgraciadamente, esto no ocurre en Kirguistán, donde el descontento con la policía ha ido en aumento durante décadas.

Los sobornos, el abuso de poder y la corrupción son visibles en toda la estructura de aplicación de la ley: desde los policías locales hasta el Ministerio del Interior. Un policía que gana aproximadamente de 10 a 15 dólares al mes tiene un nivel de vida mucho mejor que un maestro de escuela, por ejemplo, debido a la corrupción.

A finales de 2003, la FTI celebró un seminario sobre transformación de conflictos con muchos participantes de aldeas del distrito de Aksy. Se preguntó: "¿Con qué asocia la palabra «policía»?". La gente escribió las siguientes palabras: violencia, porras, esposas, miedo, insulto, humillación, sobornos, golpes,

extorsión. Un participante escribió una palabra positiva: ley.

"Antes solíamos tener a nuestros hijos alejados de la calle por miedo a los bandidos y criminales. Ahora tenemos miedo a la policía, porque en cualquier momento y en cualquier circunstancia pueden detener, insultar y humillar a nuestros hijos sólo para obtener sobornos de ellos", explicó un residente sobre el motivo por el que estaban impidiendo que la policía actuara en sus aldeas.

La tensión creciente entre la policía y la población se incrementó de forma dramática en marzo de 2002, cuando la policía abrió fuego sobre manifestantes civiles en Aksy, matando a cinco personas e hiriendo a veintisiete. El grupo, de unos 300 manifestantes, protestaba por el arresto ilegal de Azimbek Beknazarov, miembro del Parlamento de Kirguistán y conocido opositor al presidente. Beknazarov, que había iniciado en el Parlamento el proceso de destitución del presidente Akaev, había sido detenido bajo la sospecha de cometer un delito siete años antes.

Armados con ametralladoras, porras y escudos, la policía salió al paso de estos manifestantes pacíficos y les exigió su retirada. Cuando los manifestantes se negaron a retirarse y exigieron justicia a las autoridades, la policía abrió fuego sobre la multitud. Según una de las víctimas, Anaral Nazarbekov, cuando le dispararon en el estómago y yacía medio muerto, los policías le abrieron la palma de la mano, pusieron una piedra en ella e intentaron fotografiarle, para usar la fotografía como "prueba" de que los manifestantes habían provocado a la policía arrojando piedras. Nazarbekov dijo que "reunió las fuerzas que le

quedaban y tiró lejos la piedra, perdiendo el conocimiento poco después"¹.

Estos acontecimientos generaron una ola de protestas pacíficas por todo el país. Sin embargo, los abusos de poder no cesaron incluso después de los acontecimientos de Aksy. Varias personas que protestaron por la masacre de Aksy fueron arrestadas durante los días 19 y 20 de marzo de 2002, y uno de los detenidos testificó: "Los policías nos desnudaron completamente, nos ataron las manos y nos golpearon con porras. Cuando alguno de nosotros perdía el conocimiento, le echaban agua fría por encima. Más tarde, averigüé que el agua fría contribuye a evitar la formación de hematomas y edemas". Existen pruebas de que una mujer embarazada abortó unos días después de haber sido golpeada por la policía.

Además, ningún oficial de alto rango fue castigado por las muertes de manifestantes pacíficos en Aksy. En lugar de eso, se ascendió a algunos de los oficiales de alto rango a quienes la gente consideraba implicados directamente en la tragedia.

En unas circunstancias así, en las que la población no tiene confianza en la competencia e intenciones de la policía, y donde no existe un sistema por el que la policía rinda cuentas de sus delitos, la ciudadanía podría sentir la necesidad de armarse para defenderse de los policías corruptos y de los criminales. La proliferación de las armas y la vigilancia callejera son subproductos de una incapacidad para diseñar un sistema de aplicación de la ley justo y competente.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene proyectos para mejorar la capacidad policial que se centran en dos distritos de Bishkek, la capital. El proyecto de la OSCE tiene por objeto mejorar el nivel profesional de la policía.

Muchos manuales y directrices de formación contienen términos que transmiten un matiz agresivo (como, por ejemplo, "liquidar", "no permitir", "prohibir", "destruir"). Se pueden hacer muchas cosas para transformar la policía del país.

La FTI también está trabajando para conseguir un diálogo entre la población local y la policía. La iniciativa más notable al respecto es el proyecto

"Diálogo, Confianza y Ley en Aksy". La FTI se ocupó de reunir a 50 representantes de los gobiernos locales, organismos policiales y la oposición en una mesa redonda inicial que duró seis horas. Llevar a cabo la mesa redonda supuso un reto, ya que muchos de los participantes estaban armados, pues consideraban a los demás como peligrosos enemigos. Al final, los participantes formularon recomendaciones para las autoridades, los organismos policiales, los partidos de la oposición, las organizaciones donantes internacionales y las ONG.

Durante el proceso, la FTI fue capaz de conseguir una mejor comunicación entre la policía y la población, así como de establecer algunas medidas para el trabajo futuro, ya que no es posible resolver los problemas en poco tiempo. Consideramos que el resultado más satisfactorio del proyecto fue la solicitud, tanto por parte de la población como de la policía, de continuar con el proyecto.

La FTI cree que los principios siguientes fomentarán una reforma eficaz de la policía en Kirguistán:

- Es necesario evaluar las cualificaciones y actitudes de los oficiales de policía en activo según un conjunto de estándares reconocidos internacionalmente.
- El gobierno tiene que asignar recursos para la reforma de la policía y crear una autoridad independiente que dirija dicho proceso.
- Es necesario enfrentarse a la corrupción en todos los niveles de la sociedad.
- Los oficiales de policía tienen que estar dispuestos al cambio y reconocer que su profesión supone un servicio público.
- Es necesario que los ciudadanos participen en las decisiones sobre la reforma de la policía; llevar un arma como defensa sólo supone crear otro problema.

Este artículo es una aportación de la Foundation for Tolerance International en Kirguistán, www.fti.org.kg

Notas

1. Comunicación personal con autores y Alun Howard, 19 de octubre de 2004.

■ Opinión

Afganistán: Nuevos enfoques en la gestión de las armas

Un artículo reciente de *Le Monde* afirma, bastante injustamente, que "el programa de desarme del gobierno [afgano] ha sido un notable fracaso".¹ En realidad, el Proyecto de Nuevos Comienzos de Afganistán para el desarme, la desmovilización y la reinserción (DDR) ha sido sorprendentemente satisfactorio en unas circunstancias extraordinariamente difíciles. Iniciado en octubre de 2003, el programa ha desmovilizado y desarmado a 20.000 combatientes, aproximadamente un 30% del número reconocido oficialmente, pero que es probable que sólo represente el 10% de aquellos que un día tendrán que ser desarmados. Además, mediante el proyecto se han recogido alrededor de 15.000 armas pequeñas y 2780 armas pesadas.²

Las iniciativas de DDR fracasarán en última instancia a menos que la coalición dirigida por EE.UU. consiga consolidar la seguridad en todo el país. La paz sigue siendo difícil de conseguir, en parte porque Afganistán no es una nación-estado coherente: el país fue creado en la década de 1880 como división entre los imperios británico y ruso. Muchos afganos se sienten más próximos a su identidad étnica o regional que a "Afganistán". Los señores de la guerra siguen dirigiendo el país y el gobierno central es demasiado débil como para ejercer mucha influencia en la mayoría de las regiones.

Los intereses a corto plazo de los aliados a la hora de iniciar la "guerra contra el terror" han reforzado aún más el poder de los señores de la guerra, o al menos han fracasado en su intento por limitarlo. Madeleine Albright y Robin Cook afirmaron recientemente que "Afganistán sigue avanzando a trompicones, apenas un nivel por encima de un estado fracasado... El mundo debería haber hecho que los señores de la guerra eligieran entre dos opciones: cambiar o retirarse. En lugar de eso, les hemos puesto en nómina. Las tropas de EE.UU. dependen de las milicias locales para recibir ayuda contra los talibanes y Al Qaeda. Con esto aumenta el poder de los líderes de las milicias, socavando los esfuerzos del gobierno por frenar a los grupos militares organizados. Eso confirma la tradición de los grupos regionales que compiten por el dinero y el poder mediante la «ley de las armas»".³

Incluso sin estos desafíos, una sociedad sin armas no es más viable en Afganistán que en EE.UU. Los niños pastunes reciben su primer rifle en la pubertad, con el que defenderán el honor de su familia. Se debe encontrar alguna forma nueva de control de las armas que se adapte a la realidad de Afganistán.

Un nuevo método que podría resultar satisfactorio sería descentralizar la gestión de las armas. En este marco hipotético, a cada provincia se le daría un

arsenal central nuevo (o modernizado) en el que se podrían almacenar armas pequeñas y ligeras tanto oficiales como entregadas. Allí quedaría constancia de los números de registro de todas las armas y se haría hincapié en el almacenamiento seguro.

Recurriendo al concepto del honor, algo de vital importancia para los afganos, se persuadiría a los señores de la guerra para que registraran la mayoría de sus armas para así justificar su título de "comandante". También se podría proporcionar algún incentivo adicional mediante la inversión en desarrollo/reconstrucción local bajo su control. Es posible que los señores de la guerra no entregaran sus armas más grandes, pero el acto de registrarlas supondría el hecho de rendir cuentas y compartir la información. Quizá los señores de la guerra afganos no entreguen el poder al Ministro de Defensa, pero podrían aceptar a una autoridad internacional y neutral que registrara las armas, como ha hecho por ejemplo el Ejército Republicano Irlandés.

En cuanto a las armas pequeñas y ligeras, se podría delegar su registro a los Consejos de Desarrollo Comunitario (CDC) recién elegidos. Haciendo eso se conseguirían a la vez dos objetivos importantes: se reforzaría la estrategia de poder democrático del gobierno central y se utilizaría la influencia de los consejos de ancianos de las comunidades tradicionales para desafiar la de los "comandantes". Los consejos de ancianos de las comunidades controlan el *qawm* o grupo de apoyo del linaje, sin el que ningún afgano puede sobrevivir. Reforzando los CDC y usándolos para registrar las armas, se crearía un "principio de legalidad" que contrarrestaría la "ley de las armas". El mecanismo del *qawm* se utilizaría para aplicar el principio de legalidad impuesto por los CDC. En este marco hipotético, a cada adulto afgano se le permitiría poseer y registrar un arma. Todas las armas que estén fuera de esa situación se deben entregar a los CDC para su registro y destrucción pública.

El proceso de DDR tiene un único donante serio, el gobierno japonés, que aporta 35 millones de dólares de los 51 millones de dólares asignados (el PNUD está buscando una financiación suplementaria de 80 millones de dólares, lo que significa que los donantes solamente han dedicado un 40% del presupuesto requerido). Obviamente, éste es un ámbito en el que la comunidad internacional se puede repartir la responsabilidad. Los países necesitan urgentemente dedicar fondos a la tarea de la gestión de las armas, si desean de verdad conseguir la paz.

También es necesaria una importante iniciativa de concienciación pública sobre el desarme. La pequeña pero creciente sociedad civil de Afganistán puede ayudar a cambiar actitudes y a difundir una información precisa. Existe una excelente oportunidad para suscitar un debate nacional sobre estrategias y leyes de desarme, además de fomentar el diálogo sobre el papel de las milicias privadas y las compañías de

seguridad armadas. Una comisión de expertos podría desplazarse a cada provincia para celebrar debates públicos sobre las leyes y para controlar a las milicias y sus armas, sus obligaciones y expectativas. Un debate público de este tipo contribuiría a compartir información y cambiaría el clima político provincia por provincia.

El desarme es un proceso político. Los técnicos en desarme siempre fracasarán si los dirigentes políticos fracasan. Un enfoque descentralizado de la gestión de las armas podría suponer una oportunidad para debilitar significativamente el poder de los señores de la guerra.

Es necesario hacer algo para sustituir el caos actual de un estado fracasado en el que prospera el terrorismo internacional y el despotismo local. En un país que carece de autoridad gubernamental central, un

proceso descentralizado de gestión de armas y el debate nacional propuesto sobre los señores de la guerra y las milicias tiene cierta posibilidad de éxito, pero sólo si existe también una inversión seria en una paz duradera.

Robin-Edward Poulton es investigador del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme y consultor independiente. Este artículo refleja sus opiniones personales.

Notas

1. Françoise Chipaux, *Guns still call the shots in Afghanistan*, Le Monde; en inglés en the Guardian Weekly, 1-7 de octubre de 2004, pág. 21
2. *Ibidem*
3. Madeleine Albright y Robin Cook, *Unfinished Business*, International Herald Tribune, 4 de octubre de 2004.

■ En sus propias palabras ¿Cómo ha afectado la "guerra contra el terror" al tráfico de armas en Asia Central?

Barlybai Sadykov, Misión de Kazajstán en las Naciones Unidas (Ginebra).

La campaña contraterrorista en Kazajstán incluye un conjunto de medidas para contrarrestar el comercio ilegal de armas pequeñas. En una nueva ley sobre los controles de exportación se prevén normas sobre obtención de licencias, control de exportaciones de armas pequeñas y sanciones por las infracciones de la ley. Kazajstán colaboró en la redacción de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre armas pequeñas, introducida por los países de la OSCE en 2003. En la conferencia regional de Naciones Unidas, celebrada en la capital Almaty en marzo de 2004, Kazajstán propuso una iniciativa para crear un mecanismo regional de no proliferación, el *Código de Conducta para el Reforzamiento del Control del Comercio Ilícito de Armas Pequeñas* de Asia Central.

Allison Gill, Investigadora en la oficina de Uzbekistán de Human Rights Watch.

Uzbekistán es un ejemplo de los fallos de la guerra contra el terror. Recientemente, el gobierno ha utilizado la violencia política en Uzbekistán para justificar una nueva campaña contra disidentes musulmanes pacíficos. Los funcionarios del gobierno justifican el procesamiento criminal de "extremistas" islámicos sospechosos, aludiendo a la necesidad de impedir el terrorismo, aun cuando aquellas personas perseguidas no estén acusadas de cometer ningún acto violento ni de conspirar para cometer dichos actos. El gobierno ha detenido arbitrariamente a cientos de musulmanes y ha usado la tortura y otros métodos

ilegales para obtener bajo coacción testimonios utilizados en juicios injustos. Según la ley internacional, todos los gobiernos están obligados a proteger los derechos de los acusados y a respetar el principio de legalidad. Los gobiernos no pueden limitar ciertos derechos fundamentales, incluso en época de emergencia o debido a cuestiones de seguridad nacional.

Dra. Marie-Carin von Gumpenberg, Funcionaria Política en el Centro de la OSCE en Tashkent.

Como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la OSCE ha aumentado su trabajo para mejorar los controles fronterizos en Asia Central. El Centro de la OSCE en Tashkent ha llevado a cabo cinco programas de formación en gestión de fronteras para los funcionarios de aduanas y la guardia fronteriza. El objetivo principal es mejorar la capacidad de la guardia fronteriza y los funcionarios de aduanas para buscar, realizar el seguimiento y decomisar armas con las que se ha traficado ilegalmente entre Uzbekistán y los países vecinos. El objetivo final es reducir la acumulación desestabilizadora y la expansión incontrolada de estas armas en la región de Asia Central.

Khalil Nasri, Misión de Afganistán en las Naciones Unidas (Ginebra).

Desde la caída del régimen talibán, es necesario desarmar a más de 200.000 ex-combatientes. Hasta ahora, ellos han dependido de sus armas para sobrevivir. La comunidad internacional necesita respaldar el proceso de DDR prestando asistencia en la creación de oportunidades de empleo sostenible para las tropas desmovilizadas. Una forma de conseguirlo es la rehabilitación de instalaciones industriales y la recuperación de proyectos agrícolas inactivos durante mucho tiempo, como la producción de algodón y la silvicultura. Con una cuidadosa planificación y una

inversión concentrada, se pueden crear entornos estructurados que reduzcan al mínimo el riesgo de la vuelta a las armas.

Michael Hall, analista de la oficina en Tayikistán del International Crisis Group.

Está claro que el gobierno tayiko de vez en cuando ha sacado partido de la "guerra contra el terror". No se producen las violaciones absolutamente atroces de los derechos humanos que se ven en Uzbekistán, aunque

las medidas empleadas para combatir el "extremismo" son todavía bastante brutales. Una situación en la que una gran parte de la población se siente privada de sus derechos y frustrada, en combinación con grandes cantidades de armas, puede dar lugar a problemas muy graves con el tiempo. Parece como si la fatiga de la guerra estuviera manteniendo las cosas ocultas por ahora; la gente todavía recuerda perfectamente la guerra civil, pero dudo que eso vaya a durar para siempre.

■ Noticias breves

Las empresas de armas pagan por los francotiradores de EE.UU., pero el Congreso permite las armas de asalto

Cuatro días después de que las víctimas del francotirador que aterrorizó a Washington DC hace dos años presentaran un pleito por daños y perjuicios, el Congreso de EE.UU. y el presidente George W. Bush no consiguieron renovar la prohibición federal de 1994 sobre armas de asalto. "Bull's Eye Shooter Supply", de donde se robó el fusil utilizado para los disparos, aceptó pagar 2 millones de dólares a las familias de las víctimas, que consiguieron demostrar que la escasa seguridad de la empresa dio lugar al robo del arma. "Bushmaster Firearms", que fabricó el arma, aceptó pagar 0,5 millones de dólares, siendo la primera vez que un fabricante de armas de Estados Unidos acepta pagar daños "por negligencia que dio lugar al uso criminal de un arma", según el abogado de las víctimas, Dennis Henigan. Teniendo esto en cuenta, parece aún más lamentable que el Congreso de EE.UU. decidiera levantar una prohibición sobre la fabricación y distribución de 19 modelos de armas de asalto de tipo militar y otras armas con ciertas características diseñadas para uso militar. Fuentes: www.iansa.org, Washington Post, 10 de septiembre de 2004.

Partidario de Taylor recluta a liberianos para luchar en Guinea

Tragen Wantee, compañero de armas del antiguo presidente de Liberia, Charles Taylor, ha estado reclutando a antiguos miembros de las fuerzas armadas de Taylor durante los últimos dos meses, con el fin de provocar una insurrección en la vecina Guinea, según han asegurado antiguos combatientes en la ciudad fronteriza de Ganta. Los informes sobre el reclutamiento clandestino han salido a la luz en un momento en el que muchos antiguos combatientes se están quejando de que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU se niegan a registrarles en el programa DDR porque no tienen armas que entregar. Naciones Unidas calculó el año pasado que las tres facciones de Liberia conjuntamente tenían unos 38.000 combatientes, que era probable que se presentaran

para su desarme. Sin embargo, hasta ahora se ha registrado a más de 72.000. Menos de uno de cada tres ex-combatientes que se presentan al programa DDR ha entregado un arma, lo que pone de relieve la necesidad de flexibilizar los requisitos de admisión para adaptarse a la realidad de los numerosos niños, niñas y mujeres que se hicieron combatientes y que necesitan formar parte del programa DDR. Fuente: IRIN News, 22 de septiembre de 2004.

Últimas noticias sobre "Brandon's Arms"

Brandon Maxfield, un adolescente de EE.UU., fracasó en su valiente propuesta de adquisición de la empresa de armas responsable de fabricar el arma defectuosa que le provocó una parálisis hace diez años. Brandon quería cerrar Bryco Arms, uno de los principales fabricantes de armas baratas, conocidas en EE.UU. como "Saturday night specials" ("especiales del sábado noche"). En 2003 un juez de California dictaminó que Bryco había diseñado deliberadamente el arma de forma que no se pudiera descargar a menos que su gatillo de seguridad fuera *desactivado*. A Maxfield se le concedieron 50,9 millones de dólares en concepto de compensación y, en lugar de pagar a Maxfield, Bryco Arms se declaró en bancarrota. Brandon tenía previsto comprar la compañía en "bancarrota" y destruir sus existencias de más de 75.000 armas parcialmente montadas. Fuente: Associated Press, 12 de agosto de 2004. Véase también www.brandonsarms.org.

Nueva publicación del Centro: "Las armas, en su sitio. Un conjunto de recursos para dos años de acción por parte de las agencias humanitarias".

En octubre el Centro presentó una nueva publicación, descrita por Jan Egeland, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, como "un auténtico recurso para pasar de las palabras a la acción". El Centro creó esta publicación específicamente para proporcionar a las agencias humanitarias una guía accesible para ocuparse de esta cuestión, ya que creemos que esta comunidad puede desempeñar un papel especialmente decisivo a la hora de configurar el orden del día para la acción en los próximos años. "*Las armas, en su sitio*" está disponible en inglés, francés y español y ofrece una

visión general de áreas de acción relacionadas con los impactos de la utilización indebida de las armas: salud pública, desplazamiento forzoso, protección de la infancia, derechos de la mujer, retirada de armas y seguridad de los trabajadores de organizaciones de asistencia, con la inclusión de preguntas que pueden incorporarse al diseño o la evaluación del proyecto. También se ofrece una introducción al Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y los procesos e instrumentos existentes que regulan las transferencias de armas. Para solicitar copias impresas, simplemente envíennos un correo electrónico y se las haremos llegar.



Mención especial

Enhorabuena a los esfuerzos conjuntos de las ONG brasileñas Viva Rio y Sou de Paz, el Ministerio de Justicia y la Policía Federal de

Brasil, gracias a los cuales miles de brasileños han entregado unas 162.000 armas para su destrucción, y la cifra sigue aumentando.

Desde el 15 de julio, se ha puesto en marcha un programa de recompra de armas en el marco de las nuevas leyes brasileñas sobre armas. Ya muy por encima del objetivo de 80.000 armas a finales de diciembre, el proceso está provocando el debate y atrayendo la atención de los medios de comunicación de todo el país. En octubre de 2005, los brasileños votarán en un referéndum para expresar su opinión sobre la prohibición de la venta de armas a civiles. En un país en el que 36.000 personas al año pierden la vida debido a la violencia con armas, aplaudimos una iniciativa tan audaz y prometedora. Esta campaña ha recibido recientemente un premio de la UNESCO por sus esfuerzos.

El Centro para el Diálogo Humanitario es una organización imparcial e independiente, con sede en Ginebra (Suiza), dedicada a dialogar sobre cuestiones humanitarias, la resolución de los conflictos armados y el alivio de su impacto en las personas. El Centro facilita un diálogo informal a alto nivel entre los principales protagonistas de los conflictos armados y otras organizaciones interesadas, como ONG y agencias de la ONU.

Este trabajo se completa mediante la investigación y esfuerzos políticos para pasar a la acción en cuestiones humanitarias actuales como la naturaleza de los grupos armados no estatales, técnicas de mediación, economía de guerra, el imperio de la ley y la disponibilidad de armas.

En 2001 el Centro estableció el Programa sobre armas pequeñas y seguridad humana, que acomete varios proyectos dirigidos a comprender mejor el coste humano de la disponibilidad y el uso indebido de armas y a abogar por opciones para actuar al respecto.

Centro para el Diálogo Humanitario
114 rue de Lausanne
1202 Ginebra, Suiza
Teléfono: +41.22.908.1130
Fax: +41.22.908.1140
Correo electrónico: info@hdcentre.org
Web: www.hdcentre.org

Todos los derechos reservados.
Los derechos de autor de esta publicación son propiedad del Centro para el Diálogo Humanitario.

Suscríbase a nuestra lista de correo

Deseo seguir recibiendo una copia gratuita del Boletín sobre armas pequeñas y seguridad humana
Modo de distribución preferido: Correo electrónico Copia impresa

Deseo recibir varias copias del Boletín (indique debajo el idioma y la cantidad)
 Inglés Francés Español Árabe _____ Número de copias

Nombre y tratamiento _____

Organización _____

Dirección _____

Código postal _____

País _____

Teléfono _____

Fax _____

Sitio web _____

Correo electrónico _____

Por favor, copie y rellene este formulario y envíelo a Mireille Widmer, Centre for Humanitarian Dialogue, 114 rue de Lausanne, Geneva, 1202, Switzerland. También puede enviarlo por correo electrónico a widmer@hdcentre.org o por fax al +41.22.908.1140.

boletín
Armas pequeñas y seguridad humana

Directora
Cate Buchanan (cateb@hdcentre.org)
Diseño y producción
Richard Jones (rmjones@onetel.net.uk)
Exile: Diseño y servicios editoriales